



El NEXO

entre el terrorismo y la delincuencia

Cómo las bandas delictivas internacionales y los militantes se confabulan para movilizar dinero por todo el mundo

Douglas Farah

En la profundidad de la selva de Suriname, unos mineros emplean una rudimentaria compuerta para extraer partículas de oro de toneladas de arcilla roja excavada, usando mercurio que contamina el agua circundante. Los mineros, que están al margen de las leyes laborales y que suelen conseguir su trabajo sobornando a las autoridades locales, ganan unos USD 50 a la semana, una miseria al lado de los USD 24.000 que obtienen los intermediarios.

A diferencia de los métodos sumamente manuales de los mineros, los intermediarios que movilizan el oro al mercado mundial usan comunicaciones cifradas vía WhatsApp y Signal. Parte del oro se sobrefactura para lavar el producto de otras actividades ilícitas. Una parte aparece como exportaciones a otros países para ocultar tráfico de cocaína y heroína. Y otra parte termina en el zoco de oro de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, donde puede convertirse fácilmente a bitcoin, dólares o euros.


Las minas ilegales de Suriname, la ex colonia holandesa al norte de Brasil, demuestran cómo los delincuentes fusionan métodos antiguos con tecnología digital para camuflar el tráfico mundial de efectivo y materias primas. Con software sofisticado, convierten el oro en un continente en criptodivisas en otro, mediante transacciones multimillonarias que no dejan rastro en el sistema financiero mundial. El crecimiento y el alcance

mundial de sus actividades destacan la necesidad de mejorar la cooperación entre los órganos regulatorios y policiales del mundo.

Tala y minería

El oro es solo una de las fuentes de ingresos ilícitos; otras son la venta de narcóticos, la tala ilegal y el robo de minerales y bienes culturales. Las sumas son exorbitantes. En un informe de 2017, Global Financial Integrity, con sede en Washington DC, estima que el volumen de los 11 principales mercados ilícitos es de entre USD 1,6 billones y USD 2,2 billones anuales. El tráfico de drogas, que genera entre USD 426.000 millones y USD 652.000 millones, es el más lucrativo, en tanto que la minería ilegal arroja entre USD 12.000 millones y USD 48.000 millones. Según el informe, “la delincuencia transnacional seguirá creciendo mientras persista el paradigma de altas utilidades y bajos riesgos”.

La policía ha logrado mermar en algo estos flujos, pero los gobiernos apenas han logrado captar unas pocas escenas de todo un largometraje sobre las finanzas ilícitas. Según un informe de 2015 del Foro Económico Mundial sobre la economía ilícita, “las organizaciones delictivas no solo han explotado deficiencias de capacidad y política sino que se han adelantado en el uso de tecnología e instrumentos y planes sofisticados. . . De hecho,



las mismas fuerzas que posibilitan la globalización y sustentan el comercio transnacional seguro y privado son las que ahora socavan nuestra seguridad”.

Las inspecciones de aduanas son una vulnerabilidad importante: los gobiernos suelen inspeccionar solo un 5% de la carga que pasa por los puertos para no alterar las cadenas mundiales de suministro, y recurren a la tecnología, la inteligencia y las alianzas internacionales para detectar los cargamentos ilegales.

Los grupos delictivos transnacionales a veces forman lucrativas alianzas con organizaciones guerrilleras o terroristas. En seis años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos delictivos trasladaron mediante casas de empeño más de 47 toneladas de oro ilegalmente extraído, por un monto de USD 1.400 millones, a refinerías en todo el mundo, algunas en Estados Unidos. Las autoridades policiales estadounidenses determinaron que Hezbolá, un grupo islámico militante de Líbano, blanqueaba grandes sumas de dinero en una de las principales refinerías de oro de la península arábiga.

El oro se ha transformado en el medio preferido porque es lucrativo y puede convertirse en efectivo con relativa facilidad. “Para producir cocaína suelen necesitarse seis meses y muchos conocimientos, mientras que de una mina ilegal en la selva colombiana pueden extraerse dos kilos de oro por semana”, según una noticia de Bloomberg de 2013. Un kilo de cocaína vale aproximadamente USD 2.570 en la selva, mientras que un kilo de oro podría alcanzar varias veces esa cifra.

Esfuerzos redoblados

Los organismos policiales y multinacionales están redoblando esfuerzos para abordar la creciente complejidad de los flujos ilegales de dinero. Interpol creó una oficina de mercados ilícitos, y el Tesoro estadounidense está usando sus amplias facultades para sancionar a los bancos que utilizan el sistema bancario del país para lavar dinero. Las Naciones Unidas adoptaron varias resoluciones sobre financiamiento ilícito y establecieron la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional en 2003 y la Convención contra la Corrupción en 2005, entre otras.

El Grupo de Acción Financiera, fundado en 1989 y con sede en París, fija normas mundiales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del

terrorismo y supervisa los avances de los países en la aplicación de sus recomendaciones. El Banco Mundial y el FMI ofrecen asistencia técnica y capacitación para la adopción de leyes necesarias para combatir los flujos ilícitos y formular políticas y marcos jurídicos pertinentes. En los últimos 15 años, el FMI ha ayudado a definir las políticas nacionales e internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de analizar su incidencia en ámbitos como las monedas virtuales, las finanzas islámicas, las estrategias anticorrupción y sus costos, y el retiro de las relaciones de correspondencia bancaria.

Pero el lavado de dinero y sus actividades conexas persisten pese a estas iniciativas.

El caso del Banco Libanés Canadiense con sede en Beirut demuestra cómo una red delictiva internacional se valía de transacciones financieras y comerciales en cinco continentes para lavar miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Las drogas de América del Sur eran transportadas para su venta en Europa y Oriente Medio, y el producto se lavaba en el sistema financiero libanés y mediante la venta de autos usados de Estados Unidos y bienes de consumo adquiridos en Asia, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El uso de cuentas en Panamá, varios refugios extraterritoriales y Estados Unidos reveló las fallas de las estructuras regulatorias para detectar estas transacciones. Según David Asher, uno de los jefes de la investigación, el dinero en definitiva fluía hacia el Banco Libanés Canadiense, cuyo principal cliente era Hezbolá.

Colapso del banco

El banco colapsó después de que, en 2011, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designara un “riesgo primario de lavado de dinero” y brazo financiero de Hezbolá. Pero el banco es solo una de muchas operaciones similares en el mundo; para identificarlo y cerrarlo se necesitaron años y abundantes recursos, factores que escasean en otros lugares.

Venezuela se convirtió en refugio de las FARC y un eje clave de tránsito de drogas y otros productos ilícitos de Colombia. Las actividades venezolanas alcanzaron hasta el pequeño principado de Andorra en Europa. En marzo de 2015, la Red contra delitos financieros del Departamento del Tesoro

de Estados Unidos designó a la Banca Privada d'Andorra (BPA) como “riesgo primario de lavado de dinero”. (La designación fue retirada en 2016.)

Uno de los clientes del banco era Petróleos de Venezuela, o PDVSA, la petrolera estatal. Según el Tesoro de Estados Unidos, las dos empresas crearon sociedades ficticias y “complejos productos financieros para drenar fondos” de PDVSA. “BPA lavó unos USD 2.000 millones” en un lapso de dos años.

En una conferencia internacional sobre seguridad en el Centro George C. Marshall en Garmisch-Partenkirchen de Alemania en septiembre de 2015, el General Philip Breedlove, entonces jefe del Mando Europeo de Estados Unidos, señaló que muchos de los financiadores del terrorismo actúan en un plano distinto que el de la mayoría de estados-naciones. No solo tratan de amañar las reglas de juego, dijo, sino que juegan un juego completamente distinto, en el que las reglas habituales ya no se cumplen.

Algunos estados-naciones, en forma individual o como grupo, como Estados Unidos, China y la Unión Europea, disponen de recursos para atacar por cuenta propia el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero las medidas son más eficaces si se adoptan a escala regional y multilateral.

Las innovaciones como las criptomonedas plantean otro reto, y países como Corea del Sur, Estados Unidos y Japón están adoptando distintos enfoques regulatorios. El uso de comunicaciones cifradas deja a ciegas a la policía y los sectores de inteligencia, pero garantiza la privacidad de los ciudadanos de bien, lo cual como mínimo complica la formulación de una estrategia mundial común.

Acciones al portador

Pero hay medidas que pueden ser relativamente fáciles de tomar, como eliminar las sociedades con acciones anónimas al portador y exigir que una persona asuma la responsabilidad jurídica de las empresas y las cuentas bancarias. La existencia de este tipo de sociedades ha entorpecido mucho las investigaciones de PDVSA y el Banco Libanés Canadiense.

Según el informe de Global Financial Integrity, “la transparencia es un poderoso factor disuasorio de la actividad ilícita”. Los delincuentes internacionales no pueden limitarse al uso de efectivo para movilizar las enormes sumas derivadas de sus actividades; necesitan “acceso al sistema financiero mundial, y ese acceso depende de su capacidad para

mantener secretas sus identidades y la procedencia de sus bienes”.

Otra medida sería forjar un mínimo consenso en torno a la transparencia bancaria y la forma de rastrear y controlar recursos que se sospeche estén relacionados con el terrorismo y la delincuencia organizada. Decenas de paraísos bancarios *offshore* permiten que miles de millones de dólares de ganancias ilícitas encuentren refugio secreto y seguro en sus costas. Suiza es un país que últimamente ha procurado relajar las leyes de secreto bancario si hay indicaciones contundentes de que los fondos tienen orígenes ilegales.

Por último, los estados que definen de forma común a las organizaciones delictivas transnacionales y el terrorismo tienen que actuar sin demora para reforzar un marco regulatorio conjunto y multilateral, y que a la vez pueda adaptarse a la evolución de la tecnología y las operaciones financieras, tanto lícitas como ilícitas. En esta prioridad han de participar el Banco Mundial, el FMI y otras instituciones multilaterales transfronterizas para crear consenso y mediar de buena fe entre los diferentes intereses de los países.

“La transparencia es un fuerte factor disuasorio de la actividad ilícita”.

La flexibilidad y la agilidad son las claves de este marco. Los delincuentes y terroristas operan en ecosistemas en los que es fácil prever y explotar nuevas tecnologías de comunicación, instrumentos financieros y vulnerabilidades del sistema. Los estados-naciones operan en un mundo de cambio gradual en el que la adaptación es lenta y la confrontación de nuevos desafíos es complicada y está sujeta a debate.

Estas medidas no erradicarían el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que podrían seguir estando amparados por gobiernos cómplices. Pero al menos complicarían sustancialmente la explotación de los canales legítimos del comercio y las finanzas por parte de grupos delictivos. **FD**

DOUGLAS FARAH es presidente de IBI Consultants, una empresa consultora sobre temas de seguridad nacional, y de 1985 a 2005 trabajó como periodista de *The Washington Post* a cargo de América Latina y África Occidental.